

Aduana de Mazatlan, que se niega á recibir en moneda de cobre la cantidad de trescientos ochenta y ocho pesos y su correspondiente contribucion federal, que le cobra á título de contribucion de patente, é igualmente se ampara al Sr. Wegelin, contra el acto de la misma autoridad que se niega á recibir en moneda de cobre, los ciento cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos, por derecho directo de consumo de mercancías extranjeras, y la correspondiente contribucion federal.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México Setiembre 28 de 1874.—*Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Othon Wegelin, contra el cobro que le hace la Aduana terrestre de aquel puerto, de la suma de ciento ochenta y un pesos treinta y siete centavos \$ 181 37 cs., á título de derecho de consumo directo de efectos extranjeros, que expende en su giro mercantil.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que no encuentra bastantemente clara la solicitud de am-

paro intentado por D. Othon Wegelin, y si demasiado confusa en algunos puntos, pues tantos fundamentos quisieran aducirse en favor de la pretencion, que á veces se encuentra un amontonamiento de citas, bien difícil de coordinar á primera vista. Aun hay algunos errores ó equivocaciones, pues en el tercer párrafo se habla del art. 13 fraccion 9ª, y al final del mismo párrafo ya no se cita mas que el art. 15 de la Constitución.

En concepto del que suscribo, y teniéndose presente que los juicios de amparo solo resuelven con especialidad el caso y á la persona del reclamante, parece innecesario y difuso por demás, que se ocupe el quejoso de todos los vicios que encontró á la ley sobre derecho de consumo, cuando á su propósito solo cumplia hablar del art. 6º relativo á los giros mercantiles, y segun el cual se le cobra por la Aduana terrestre una cantidad de pesos en moneda de plata ó oro, con exclusion de cobre.

El Fiscal pues, para no estraviar la cuestion ni debilitar tampoco su interés, pasa á ocuparse de dos puntos que en su concepto son los que han dado origen á la solicitud de amparo.

Primero: ¿pudo la Legislatura del Estado sin contravenir las disposiciones de la Constitución general, imponer á los giros mercantiles de este puerto las cuotas que señalan las diversas fracciones del art. 6º de la ley de 23 de Mayo de 1873?

Segundo: ¿cabe en las facultades del Congreso del Estado, como lo determina la ley de presupuestos del mismo de 27 de Diciembre de 1873, excluir para el pago de las contribuciones la moneda de cobre?

Se ocupará de uno y otro punto.

Por mas que al impuesto de tanto por ciento que deben pagar los giros mercantiles de este puerto, se les haya comprendido en la ley que lleva el nombre de *derecho de consumo á los efectos extranjeros*, basta examinar un poco los términos de la ley, para convencerse de que no es tal derecho de

consumo, pues que se causa antes de que los efectos se consuman, y no es otra cosa que un derecho de importacion; y esto es tan claro, que sin perjuicio de este derecho de importacion á los efectos que se *importen directamente del extranjero*, se establece otro para los que se internen fuera del puerto, una vez nacionalizados. (art. 3º de la ley)

Es así que esto importa tanto como legislar el Estado sobre el comercio extranjero ó sea sobre las importaciones, atribucion especial del Congreso de la Union, segun la fraccion 9ª del art. 72 y art. 112 de la Constitucion general, luego es evidente que en esta parte ha habido una invasion de facultades, y que por consiguiente procede el amparo que se solicita.

Respecto de la exclusion en el pago de derechos de la moneda de cobre, y teniéndose presentes las ejecutorias que en asuntos semejantes han recaído, el Fiscal, para no ser mas difuso, se refiere en lo conducente á lo que tiene pedido en otro juicio de amparo promovido por los Sres. Tames y Casassus, representados por D. Gerardo Garamendi.

Dice así:

“En cuanto á la invasion de facultades de parte de la Legislatura del Estado al expedir las diversas leyes de 31 de Diciembre de 1872, y 14 de Febrero y 27 de Diciembre de 1873, el que suscribe disiente del parecer anterior emitido por el C. Gefe de Hacienda, pues aunque este funcionario no se ocupó de la verdadera cuestion, que consiste en si hubo ó no invasion de facultades, lo que resuelve en sentido negativo, por que el mismo Congreso de la Union, dice, decretó la autorizacion del cobre: la invasion está en la expedicion de esos decretos que absolutamente no tuvo facultad el Congreso del Estado para darlos, por que terminantemente lo prohíbe la fraccion 23 del art. 72 citado.

Por otra parte, C. Juez, por mas que el C. Administrador de rentas y el C. Gefe

de Hacienda en funciones de Fiscal, no encuentren identidad entre los fallos de la Suprema Corte y el caso presente, no hay duda que caben aquí las mismas consideraciones y fundamentos de estricta justicia en que se apoyó aquella para declarar que el Gobierno que ha emitido la moneda de cobre, tiene la obligacion de recibir en pago en sus oficinas esa misma moneda, y no se diga que esto se refiere únicamente á las de la federacion, por que entonces se varia el caso de que los Estados podrian legislar contra el art. 72 fraccion 23, y declarar fuera de la circulacion unos valores emitidos por el Gobierno federal.

El que suscribe se ha opuesto otras veces á la admision de la moneda de cobre en las oficinas federales y aun del Estado, antes que las Supremas ejecutorias de la Corte de Justicia Nacional hubieran fijado la jurisprudencia en este punto, y fundándose principalmente en que no habia erido legal la moneda, ni legales y debidamente autorizadas las emisiones que de ella se hicieron en el Estado. Pero hoy ya no puede vacilar, y por esto es, que considerando que la Legislatura del Estado ha trasmitido sus facultades, al decretar sobre la no admision y circulacion de la moneda de cobre, es evidente que ha invadido las facultades del Congreso de la Union, y por esto concluye pidiendo, que se declare &c.”

Por todo lo expuesto, y sin tocar por ahora, por la premura del tiempo, algunas otras cuestiones que se indican, así por la parte del quejoso, como por la del C. Administrador de la Aduana terrestre, y de cuyas cuestiones se ocupará el Fiscal en los últimos alegatos, concluye pidiendo al Juzgado, se sirva resolver: que la Justicia de la Union ampara y protege al Sr. D. Othon Wegelin, contra los precedimientos del Administrador de la Aduana terrestre, al exigirle el pago del tanto por ciento sobre gros mercantiles que adeuda, conforme al artículo 6º del decreto de 23 de Mayo de 1873, usando de la facultad coactiva y no admi-

tiendo en pago la moneda de cobre que ha ofrecido el solicitante.

Mazatlan, 25 de Junio de 1874.—
L. Gaona.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Junio 29 de 1874.—El Sr. D. Othon Wegelin de esta vecindad y comercio, pide amparo contra el cobro que le hace la Aduana terrestre de esta Ciudad, de la suma de ciento ochenta y un pesos treinta y siete centavos, á título de derecho de consumo directo de efectos extranjeros que expende en su giro mercantil correspondiente al mes de la fecha, y diez pesos noventa y un centavos mas por via de multa, por no haber hecho el pago oportunamente, exigiendo todo en moneda de plata, con exclusion de la de cobre que circulaba en el Estado.

Para fundar su queja en cuanto al cobro, dice que el art. 6º de la ley del Estado de 23 de Mayo del año próximo pasado en que se apoyó la Aduana para recaudar ese impuesto, invade la esfera de atribuciones de la autoridad federal, á quien la Constitucion encomienda la facultad de expedir aranceles para el comercio exterior, y prohíbe á los Estados establecer derecho alguno de puerto y contribuciones ó derechos sobre importaciones ó exportaciones. (art. 72 fraccion 9ª, y 112 fraccion 1ª)

Añade que la contribucion impuesta por el art. 6º, es privativa para los giros mercantiles de este puerto y no comprende los demás del Estado, infringiendo la garantía que otorga el art. 13 de la misma Constitucion, y que obliga á los comerciantes por mayor de esta plaza, á un doble pago de los impuestos decretados por esa ley, puesto que su art. 1º impone un seis por ciento de consumo sobre los derechos de Arancel marítimo á los que internen despues de importados, y el art. 6º les manda cobrar otra cuota, por ese mismo consumo por mayor.

TOMO VI.—PARTE II.

Considerando: que en la primera de las modificaciones decretadas por el presupuesto de ingresos del Gobierno general por la ley de 21 de Mayo de 1872, se derogaron los arts 17 y 83 del Arancel de 1º de Enero del mismo año, que provenia que los derechos impuestos en él, fueran los únicos que pagaran los efectos extranjeros, sin que los Estados pudieran gravarlos con otro alguno en los lugares de su consumo.

Que esta derogacion sería inútil, si habia de quedar subsistente la misma prohibicion por los arts. 72 fraccion 2ª, y 112 fraccion 1ª de la Constitucion.

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, estima esa derogatoria como una libertad á los Estados para gravar á los efectos extranjeros por razon del consumo que se haga de ellos en su territorio. (sentencia fecha 3 de Abril de 1873, visible á fojas 42 y 43 del tomo 4º del Semanario Judicial.)

Que no se puede llamar privativo el derecho de consumo que establece el art. 6º para los giros mercantiles de esta plaza, por que para los del interior del Estado decreta igual impuesto la misma ley en su art. 1º, aunque partiendo de diferentes bases, pues para los primeros es un ciento cincuenta por ciento ó un ciento por ciento sobre la cuota que pagan de derecho de patente, y para los segundos un seis por ciento sobre la cuota de importacion.

Que si por esta diferencia de bases sucede que las mercancías del expendedor por mayor, son gravadas por una parte con el ciento cincuenta por ciento, y por otra con el seis por ciento mientras que los expendedores de la misma clase del interior del Estado solo reportan el segundo de dichos impuestos, esta desproporcion no dá derecho para reclamar contra el impuesto de consumo, por violacion del art. 13 de la Constitucion, porque es general para todo el Estado.

Que la exclusion de la moneda de cobre del pago de los derechos del Estado hecha

por la fracción 22 del art. 1º de su ley de 27 de Diciembre de 1873, es una limitación de la circulación de la propia moneda, que solo corresponde imponer al Congreso de la Unión (art. 72 fracción 23, y 111 fracción 3ª de la Constitución.)

Que tal limitación aplicada por el Administrador de la Aduana al Sr. Wegelin, es una expropiación de un derecho que á éste le dan las leyes generales.

Con fundamento del art. 1º fracciones 1ª y 3ª de la ley de 20 de Enero de 1869, art. 27 de la Constitución general y los demás que van indicados, se resuelve:

Primero: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al Sr. D. Othon Wegelin, contra el cobro que le hace el Administrador de la Aduana terrestre de esta Ciudad, de la suma de ciento ochenta y un pesos treinta y siete centavos, por vía del derecho de consumo del corriente mes, impuesto por el art. 6º de la ley del Estado de 23 de Mayo del año próximo pasado.

Segundo: que la Justicia de la Unión ampara y protege al mismo Señor, contra la providencia del propio administrador que se niega á recibirle en moneda de cobre la referida suma de ciento ochenta y un pesos treinta y siete centavos, y la de diez pesos noventa y un centavos de gastos de cobranza, de la partida anterior.

Tercero: hágase saber; remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sáquense previamente dos copias de esta sentencia, una para el Semanario Judicial y otra para el periódico de esta Ciudad.

El suplente 2º en ejercicio, C. Lic. Joaquín García, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Joaquín García*.—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia que certifico. Mazatlan, Julio 13 de 1874.—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 8 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Othon Wegelin, contra el cobro que le hace la Aduana terrestre de aquel puerto, de la suma de ciento ochenta y un pesos treinta y siete centavos \$ 181 37 cs., á título de derecho de consumo directo de efectos extranjeros que expende en su giro mercantil, para cuyo pago se exige exclusivamente en moneda de plata ú oro. Visto el informe de la autoridad responsable; el pedimento fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: Que como consta del texto del decreto de la Legislatura del Estado de Sinaloa, en cuyo art. 6º funda el cobro que hace al quejoso la Aduana terrestre de Mazatlan, no se trata propiamente de gravar la importación de efectos extranjeros, para lo cual carece de facultad dicha Legislatura, sino de asignar una contribución á los giros mercantiles de efectos importados, que esta pesa sobre los capitales y es idéntica á lo que generalmente se conoce con el nombre de derecho de patente, el cual no importa un recargo sobre los derechos de importación.

Que no puede llamarse privativo el decreto de la Legislatura, por que, aunque partiendo de diferentes bases, el impuesto ha sido distribuido proporcionalmente en todo el Estado; que la exclusión de la moneda de cobre en el pago que se le exige al solicitante es ilegítimo, por invadir las facultades del Congreso federal, que es el solo que puede legislar sobre la moneda.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución, se decreta:

1º: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito en sus dos partes, y en consecuencia: La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Sr. Othon Wegelin, contra el cobro que le hace

el Administrador de la Aluana terrestre de Mazatlan.

2º: La Justicia de la Union ampara y protege al Sr. Othon Wegelin, contra la exclusion de la moneda de cobre, prevenida por la autoridad en dicho cobre.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Viguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Allamirano.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 26 de 1874.—*Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de 2º Distrito de México por el C. Hipólito Rondan, contra la orden del C. Gobernador del Distrito, por la clausura de un boliche y cantina de propiedad del quejoso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 2º de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que denegada por este Juzgado, la suspension de la orden del C. Gobernador del Distrito que pidió el quejoso, se ha dado nueva vista al que suscribe, para pedir lo que sea en su concepto legal, respecto del ocurso de amparo á que se contrae el presente juicio, dirá pues:

Que D. Hipólito Rondan, estableció en el número 2 de la calle de San Ildefonso, un

café y boliche. Este establecimiento no prohibido por la ley, es verdad, ha sido á poco de su apertura, objeto de la critica de varios padres de familia porque temieron lo que al fin se realizó, y fué, que estando en la misma calle, en donde se halla la escuela preparatoria de estudios, era una ocasion constante y próxima de distraccion para los jóvenes cursantes, quienes vacaban á sus cátedras, resultando de aquí, un mal grave á los jóvenes, y un descrédito á la escuela preparatoria, atribuyendo á mala direccion de estas, los pocos adelantos de los cursantes.

Diéronse algunos casos, en los que á mas de la pérdida de tiempo para esos cursantes, dieron el resultado de que estos perdieran iguales cantidades de dinero, ya abusando de la confianza de sus padres, ya empeñando libros de asignatura que se vendian despues á ínfimo precio, y ya dándose lugar á otros abusos, que es fácil de suponer se hayan cometido.

Estos desarreglos llamaron la atencion de la autoridad política, y teniendo presente, que no todo lo lícito es honesto, tomó la providencia de buen orden y moral pública de mandar cerrar dicho establecimiento.

D. Hipólito Rondan, ocurre por el recurso de amparo, á la Justicia federal, para que lo ampare, contra este acto de la autoridad política, porque importa una violacion de la garantía que la Constitucion otorga en su artículo 4º.

En efecto, todo hombre es libre para abrazar la profesion, industria ó trabajo que le acomode. Muy bien; pero ese mismo artículo agrega, siendo útil y honesto, es decir, no opuesto á las buenas costumbres, ni en perjuicio del orden público. Y para conciliar este artículo la libertad natural del hombre, con lo que se debe al orden, á la moral y utilidad pública, establece: que esa libertad para abrazar la profesion ó industria, no se le impedirá sino por sentencia judicial, cuando ataque los derechos de tercero, ó por resolucion gubernativa, dictada